



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.  
SUSCITADO ENTRE EL DIRECTOR  
GENERAL DE INFORMÁTICA, AHORA  
DIRECTOR GENERAL DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
DE LA SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y JOSÉ  
ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ.**



A CORTE DE  
LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
correspondiente a la sesión del veintidós de noviembre de  
dos mil once.

**VISTOS; Y,  
RESULTANDO:**

**PRIMERO.** El entonces titular de la Dirección General  
de Informática de la Suprema Corte de Justicia de la  
Nación, mediante escrito presentado ante la Mesa de  
Control de Correspondencia de la Comisión Substanciadora  
Única del Poder Judicial de la Federación el veinte de  
agosto de dos mil diez, demandó la autorización para dar  
por terminados los efectos del nombramiento de José  
Antonio López López, Profesional Operativo, rango F,  
puesto de base, plaza número 1795, adscrito a la Dirección  
General de Informática, por haber incurrido en la causal de

## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

cese contemplada en la fracción V, inciso a), del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

**SEGUNDO.** Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil diez, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ordenó la formación del expediente respectivo, el que se registró con el número 3/2010-C. Se tuvo al entonces titular de la Dirección General de Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formulando demanda laboral; por señalado el domicilio que indicó para oír y recibir notificaciones, por designados a sus apoderados legales y por autorizados a los licenciados que señaló; asimismo, admitió a trámite la demanda laboral mediante la cual ejerció la acción relativa a la autorización para que dejara de surtir efectos el nombramiento de José Antonio López López, y tuvo por ofrecidas las pruebas que describió en su escrito de demanda, reservándose acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno, en términos del artículo 132 de la citada ley burocrática.



Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 127 bis y 136 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenó emplazar y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

correr traslado al demandado en este conflicto de trabajo, para que en el término de nueve días hábiles contados a partir del siguiente al en que le fuera notificado el acuerdo citado, diera contestación a la demanda laboral instaurada en su contra, apercibido que de no hacerlo en el lapso que se le concedió, o de resultar ilegalmente representado, se le tendría por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.



**TERCERO.** Por escrito de siete de septiembre de dos mil diez, presentado el ocho siguiente ante la Mesa de Control de Correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, José Antonio López López contestó la demanda laboral instaurada en su contra; en proveído de diez de septiembre de dos mil diez se le tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma legales, y por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer; se ordenó correr traslado al actor con copia de la referida contestación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.

**CUARTO.** El veintidós de septiembre de dos mil diez se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se admitieron las pruebas de las partes que cumplieron con los requisitos legales y se desecharon las que no los cumplieron.

**QUINTO.** Una vez desahogadas las pruebas admitidas y presentados los alegatos, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil once, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar el expediente al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para la formulación del proyecto de dictamen respectivo.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este conflicto laboral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que se trata de un conflicto de trabajo suscitado entre el titular de un área administrativa del Alto Tribunal y uno de sus trabajadores, respecto de quien demanda la autorización para que deje de surtir efectos el nombramiento otorgado; y, además, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

emitió el dictamen a que se refiere el artículo 153 de ese último ordenamiento legal y 1º del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.

**SEGUNDO.** Como cuestión previa, es pertinente dejar precisado que la acción que hizo valer entonces titular de la Dirección General de Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en:

La autorización del cese o terminación de los efectos del nombramiento de José Antonio López López, Profesional Operativo, rango F, puesto de base, en la plaza número 1795, adscrito a la Dirección General de Informática, por haber incurrido en la causal contemplada en la fracción V, inciso a), del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Por su parte, el demandado José Antonio López López contestó que:

La acción era improcedente, porque contrariamente a lo argumentado por el actor no había incurrido en la causal que señala la fracción V, inciso a), del artículo 46 de la ley burocrática federal, y que carecía de derecho para demandar la autorización para dejar sin efectos su nombramiento, debido a que el término para solicitar esa



autorización prescribió en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Bajo ese contexto, en términos de la litis planteada en el presente conflicto laboral, acorde con la pretensión y la defensa y excepción antes sintetizadas, en principio debe analizarse la de prescripción, por ser de estudio preferente en tanto tiene carácter perentorio e impeditivo desde el punto de vista procesal y, por ende, tiende a desvirtuar la acción intentada, ya que de ser fundada haría innecesario el estudio de fondo del asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente tesis aislada aplicable por analogía, que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

**“COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO PREFERENTE DE LAS EXCEPCIONES DE.** *Las excepciones de cosa juzgada y de prescripción, tienen el carácter de impeditivas desde el punto de vista procesal, supuesto que tienden esencialmente a destruir la eficacia de la acción, independientemente de su justificación intrínseca; por tanto, si la Junta responsable absolvió a la empresa demandada, porque consideró que se habían acreditado las*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por aquélla, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo de la Junta, deben estudiarse primeramente las excepciones mencionadas, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que la autoridad debió considerarlas improcedentes, pueden estudiarse y decidirse las violaciones a las leyes de procedimiento, que se invoquen en la demanda de garantías.”*

*(Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXVI, Página: 1620).*

Antes de abordar el estudio de la mencionada excepción resulta pertinente citar algunos criterios que a ese respecto ha emitido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dicen:

**No. Registro: 922,241**

**“PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. SÓLO SE CONTEMPLA LA QUE SE REFIERE A LA PÉRDIDA DE DERECHOS POR NO EJERCERLOS EN SU OPORTUNIDAD.** Del concepto de prescripción proporcionado por la doctrina bajo las dos vertientes que comprende, esto es, por un lado, la adquisitiva y, por otro, la pérdida de un derecho por el simple transcurso

*del tiempo, se observa que en materia laboral únicamente se contempla el segundo supuesto, es decir, la prescripción negativa o pérdida de un derecho por no ejercerse oportunamente.”*

*(Novena Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Página: 160).*

**No. Registro: 922,207**

**“PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.** *La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis*







## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



específicas que es complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje.”

(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, Página: 31).

Al oponer la excepción de prescripción el demandado cumple con particularizar los elementos necesarios para su

estudio, al precisar que los hechos en que se apoya la parte actora para pedir la autorización de cese ocurrieron el trece de abril de dos mil diez, fecha en que se dio el supuesto acto de violencia que se le atribuye, en contra de un compañero trabajador, pues aduce que a partir de ese día la actora tuvo pleno conocimiento de los hechos y no el veintitrés del propio mes (abril de 2010) como lo sostiene la parte actora, de ahí que el término de cuatro meses al que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, concluyó el catorce de agosto siguiente, por lo que al veinte de ese mes en que presentó su demanda ya había transcurrido con exceso el aludido plazo al que se refiere la citada disposición legal.

En atención a lo anterior, resulta conveniente precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 a 114 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, existen dos clases de términos de prescripción en materia laboral burocrática: **genérico**, cuando la ley establece el plazo de un año para ejercer las acciones que nazcan de la propia ley, con motivo del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijan las condiciones generales de trabajo; y, **específicos**, para lo cual se establecen plazos de un mes, cuatro meses y dos años, atendiendo a la acción específica que se intente.



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El término genérico para que prescriban las acciones no sujetas a un plazo específico en la ley es de un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 que dice:

**“Artículo 112.** Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes”



Entre las prescripciones específicas, el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé la relativa a la facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas. En ese supuesto, conforme a la fracción II, inciso c), de ese precepto, los funcionarios tienen cuatro meses contados a partir del momento en que son conocidas las causas para demandar la terminación de los efectos del nombramiento.

El referido numeral dispone:

**“ARTÍCULO 113.- Prescriben:**

**I.- En un mes:**

**a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, y**

***b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.***

***II.- En cuatro meses:***

***a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.***

***b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y***

***c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas***".

Ahora bien, para estar en aptitud de pronunciarse respecto a si transcurrió o no el término prescriptivo a que se ha hecho referencia, resulta indispensable conocer, en principio, a partir de cuándo inicia la prescripción y posteriormente esclarecer la fecha en que se conoció la causa generadora para cesar al servidor público.

Resulta importante precisar que de conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual ha quedado



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

transcrito con anterioridad, la acción de los titulares de las dependencias de gobierno para solicitar autorización al tribunal laboral respectivo a fin de dejar sin efectos el nombramiento de algún trabajador, se encuentra sujeta al término de cuatro meses, que se cuenta a partir del momento en que se conocen las causas que ameriten el cese del servidor público.

Por su parte, el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo 46, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Dicha acta administrativa y los documentos que se hayan agregado a la misma, deberán acompañarse a la demanda como instrumentos base de la acción, si es el caso de demandar ante el tribunal laboral respectivo la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador.

CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DE ACUERDO

Luego, en términos de dichas formalidades conforme a las que debe instaurarse el acta administrativa laboral en contra de un trabajador, el titular tiene oportunidad de apreciar las pruebas de cargo y de descargo inherentes a la comprobación de los hechos que se atribuyen a dicho trabajador al finalizar dicha diligencia y, según el resultado de dicha ponderación, en su caso, demandar la autorización a fin de dar por terminados los efectos del respectivo nombramiento.

Por consiguiente, es al concluir el acta administrativa laboral, cuando el titular tiene conocimiento pleno de la causa de cese que servirá de sustento a la acción que ejerce, por lo que al día siguiente empieza a transcurrir el término de cuatro meses previsto en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la ley burocrática, ya que hasta entonces el equiparado a patrón cuenta con todos los elementos de prueba para determinar si procede o no demandar la terminación de los efectos de nombramiento del trabajador y, en su caso, está en posibilidad de acompañar a su demanda el acta relativa con los documentos anexos, acorde a lo que establece el artículo 46 bis de la propia ley de la materia.

Cabe citar en apoyo de lo anterior, la tesis que al rubro y texto dice:







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No. Registro: 245,734

**"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 113, FRACCION II, DE LA LEY DE LOS.** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el término para la prescripción de la acción que puede ejercitar el Estado en el caso previsto en el artículo 46, fracción V, del ordenamiento citado, para solicitar autorización para cesar a los trabajadores sin responsabilidad para el Estado, debe computarse desde el día siguiente al de la conclusión de la investigación administrativa que se practique al efecto, ya que la finalidad perseguida con estas investigaciones, en los términos del artículo 46 bis de dicha ley, consiste precisamente en allegar los medios de convicción para tener un conocimiento exacto de la conducta de los trabajadores y estar en condiciones de decidir si procede o no ejercitar la acción."

(Séptima Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Informe 1978, Segunda Parte, página 32).

ORTE DE  
NACION  
DE ACUERDO

En ese tenor, resulta infundada la excepción de prescripción opuesta por el demandado José Antonio López López, ya que no es a partir del conocimiento de los hechos por parte del titular actor -que según afirma fue el trece de abril de dos mil diez en que acontecieron-, cuando empieza a correr el término de prescripción de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino al día siguiente al en que concluyó el acta administrativa instaurada en su contra, en términos de lo antes puntualizado.

En esas condiciones, es dable concluir que el titular actor presentó en tiempo y forma legales la demanda mediante la que solicita autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del trabajador demandado, ya que el acta administrativa laboral concluyó el doce de agosto de dos mil diez, y la referida demanda fue presentada el veinte de los propios mes y año, como se advierte del sello de recibido de la Mesa de Control de Correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación (foja uno vuelta del expediente laboral), por lo que es inconcuso que a esa fecha de presentación no había transcurrido el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Al resultar infundada la excepción de prescripción opuesta por el demandado, procede entrar al estudio de la acción que el actor ejerce.

**TERCERO.** En los términos en que quedó planteada la litis en este asunto, corresponde al actor Director General de Informática, actualmente, Director General de Tecnologías de la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acreditar los presupuestos de la acción que ejerce, relativa a la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de José Antonio López López en la plaza de Profesional Operativo, identificada con el número 1795, rango F, puesto de base, adscrito a la Dirección General de referencia.

En ese sentido, el actor debe acreditar que cumplió con las formalidades previstas en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que el demandado incurrió en la causa de cese prevista en el inciso a) de la fracción V del artículo 46 de la propia ley de la materia.

Al respecto procede analizar, en primer lugar, si el actor instrumentó el acta administrativa laboral con las formalidades previstas en el artículo 46 bis de la invocada ley burocrática, por tratarse de un requisito básico para la procedencia de la acción de que se trata, como lo establece

la tesis de jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que se precisan a continuación:

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.**

*Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el artículo 46 bis de la propia ley ordena: ‘Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical’ y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta*





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CORTE DE  
LA NACIÓN  
DE ACUERDO.

administrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 bis, debe ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusión de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y por lo mismo dicha acción no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y éste aduce en el juicio que lo cesó sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumplió con dicha exigencia legal, se está en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por sí solo bastará para considerar que el despido fue injustificado.”

No. Registro: 915,787. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN. Tesis: 650. Página: 528.

El artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone:

**“Artículo 46 bis.-** Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.

Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma”.

El titular actor asevera haber cumplido con las formalidades previstas en el precepto legal transcrito al







## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

instrumentar el acta administrativa 1/2010, la cual obra como anexo por separado del conflicto laboral, al igual que el expediente personal a nombre del demandado, de los que destacan las constancias siguientes:

Oficio número GDGI.SGS10-615-0 de diecinueve de abril de dos mil diez, por el que el Director de Abastecimiento Informático de la entonces Dirección General de Informática, comunicó a José Antonio López López el plazo de tres días que se le concedía para que, por escrito, hiciera las manifestaciones que considerara convenientes respecto de la conducta que desplegó el trece de abril de dos mil diez, en que se dice que agredió físicamente a su compañero de trabajo Bernabé Ortega Pérez, al lanzarle un objeto que le pegó en la cara (lata vacía de refresco), en el área de transición informática ubicada en el primer piso que conecta los edificios de Bolívar y 16 de Septiembre (foja 133 del expediente personal).



Escrito de veintiuno de abril de dos mil diez, mediante el que en contestación al oficio antes indicado, José Antonio López López explica al Director de Abastecimiento Informático de la referida Dirección General de Informática, los hechos ocurridos el trece de abril de dos mil diez (Foja 134 del expediente personal).

### CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

Acta de hechos de veintitrés de abril de dos mil diez, en la que se hizo constar el acontecimiento ocurrido el trece de abril de ese año, relativo a la supuesta agresión cometida por José Antonio López López en contra de su compañero de trabajo Benabé Ortega Pérez. En dicha acta participaron y firmaron, además de los señalados trabajadores, los testigos Atanasio Isaac Vera Ramírez, Jorge Pablo González Leal y José Concepción Marbán Vergara, así como de la presencia y firma de los testigos de asistencia Dione Velázquez Ruiz y Carlos Eugenio Carrillo Quintana (Anexo I de pruebas).

Acuerdo de catorce de julio de dos mil diez, emitido por los entonces Directores Generales de Informática y de Personal, con el que dieron inicio al procedimiento para la instauración del acta administrativa 1/2010 en contra de José Antonio López López, en términos de lo establecido en los artículos 35 al 41 del Acuerdo General de Administración V/2008 y en el numeral 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con motivo de que probablemente había incurrido en la causal de cese a la que se refiere el inciso a) de la fracción V del artículo 46 de la invocada ley burocrática, consistente en haber realizado el acto de violencia que se describe, en contra de Bernabé Ortega Pérez.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Oficios de la misma fecha conforme a los que se notificó el acuerdo anterior a José Antonio López López y a su representante sindical, a los que se anexaron las pruebas descritas, además de que fueron citados para concurrir a las diez horas del doce de agosto de dos mil diez al levantamiento del acta administrativa que sería instaurada en contra de dicho trabajador, en la que éste podría hacer valer lo que a su derecho conviniera y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes y su representante sindical, coadyuvar en su defensa (Anexo I de pruebas).



A las diez horas del doce de agosto de dos mil diez se instrumentó el acta administrativa 1/2010 por los entonces Director General de Informática, ingeniero Miguel Sebastián Casillas Ruppert, y en representación del Director General de Personal el licenciado Marco Antonio Bouchain Rodríguez, en la que se precisaron los hechos atribuidos a José Antonio López López, consistentes en que el trece de abril de dos mil diez arrojó una lata de refresco vacía que pegó en la cara de su compañero de trabajo Bernabé Ortega López, lo que se afirmó que constituye un acto de violencia conforme a los términos consignados en el acta de hechos de veintitrés de abril de dos mil diez con la que se le corrió traslado, que podría configurar la causal contemplada en el inciso c) de la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

En la indicada acta también consta que se recibieron las declaraciones de los trabajadores José Antonio López López y Bernabé Ortega Pérez; de los testigos de cargo Atanacio Isaac Vera Ramírez, Jorge Pablo González Leal y José Concepción Marbán Vergara, con la participación del representante sindical Leonardo Aurelio López Taboada, y que actuaron como testigos de asistencia, los asesores Jesús Corona Uribe y Armando Angulo Acosta (Anexo I de pruebas).

Acto continuo se declaró cerrada el acta de que se trata a las once horas con veinte minutos del día de la fecha (agosto 12 de 2010), *“la que es firmada por los que en ella han intervenido y por los testigos de asistencia y de cargo, cuyas identificaciones se anexan a la presente acta, entregándose una copia de la misma al C. José Antonio López López, al C. Bernabé Ortega Pérez y al Representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación”*.

De las constancias reseñadas se advierte que el entonces Director General de Informática, al instaurar el acta administrativa laboral cumplió con los requisitos formales previstos en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que al tener conocimiento de los sucesos a los que se contrae el acta de hechos de veintitrés de abril de dos mil diez, que le



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



hicieron presumir la existencia de la causal de cese en la que podría haber incurrido José Antonio López López por el acto de violencia que realizó en contra de su compañero de trabajo Bernabé Ortega Pérez, prevista en el inciso a) de la fracción V del artículo 46 de la invocada legislación burocrática, dictó el acuerdo inicial del procedimiento relativo conforme al cual, en lo que aquí interesa, fueron citados los nombrados trabajadores, así como el representante sindical del primero de ellos, para que acudieran en la fecha y hora determinadas en que se levantaría el acta administrativa laboral que sería instaurada en contra del nombrado José Antonio López López, a quien se corrió traslado con las pruebas que existían en su contra, se le hicieron saber los hechos que le eran atribuidos, a fin de que al llevarse a cabo tal diligencia manifestara lo que conviniera a sus intereses, ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y su representante sindical coadyuvara a su defensa.

En fecha y hora determinadas (10:00 horas del 12 de agosto de 2010) se procedió a levantar el acta administrativa, en la que se precisaron los hechos atribuidos al trabajador José Antonio López López, se recibió su declaración y la de los testigos de cargo, sin que propusiera prueba alguna, intervino su representante sindical para formular alegatos a favor de su representado, y al concluir dicha acta fue firmada por los que en ella



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

intervinieron, así como por dos testigos de asistencia, y en ese acto se entregó una copia del acta al referido trabajador, al igual que a su representante sindical.

En el curso del procedimiento laboral, al titular actor le fue admitido en la audiencia de ley celebrada el veintidós de septiembre de dos mil diez, el medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma por los suscriptores del acta de referencia, en la que se dio oportunidad al demandado para que dentro del término legal concedido les formulara preguntas respecto del contenido de tal documento, y como no lo hizo, se declaró perdido su derecho para ese efecto.

Por tanto, con el desahogo del aludido medio de perfeccionamiento en el que los suscriptores del acta administrativa de referencia la ratificaron en contenido y firma, adquirió valor probatorio pleno en cuanto al cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la invocada ley burocrática en términos de su numeral 11, y lo establecido en la tesis de jurisprudencia que se aplica por su sentido y alcance jurídico, de rubro, texto y datos de localización que se precisan a continuación:





282  
FORMA A-55  
263

CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**“ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS  
CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR  
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  
ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VALOR  
PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES  
RATIFICADO POR SUS FIRMANTES”**

Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha ley, toca al titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la

existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y **siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento**, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento.”

No. Registro: 207,821. Jurisprudencia.  
Materia(s): Laboral. Octava Época. Instancia:  
Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario  
Judicial de la Federación. 58, Octubre de 1992.  
Tesis: 4a./J. 23/92. Página: 23.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Corolario de lo anterior es que se encuentra acreditado que en la instrumentación del acta administrativa laboral de referencia, el titular actor cumplió con los requisitos formales previstos en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.



Establecido lo anterior, procede analizar si en el caso se encuentra acreditada la causa de cese prevista en el artículo 46, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que invocó el titular actor en apoyo de la acción que ejerce, relativa a la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de José Antonio López López en la plaza de Profesional Operativo, identificada con el número 1795, rango F, puesto de base, adscrito a la entonces Dirección General de Informática, por haber incurrido en el acto de violencia constitutivo de aquella causa de cese por los hechos que se le atribuyen, consistentes en haber lanzado una lata de refresco vacía que pegó en la cara de su compañero de trabajo Bernabé Ortega López, cuando se encontraban en servicio el día trece de abril de dos mil diez.

Ahora bien, a efecto de determinar si las pruebas reseñadas en el acta administrativa instaurada en contra del trabajador demandado, con el valor probatorio que adquirieron dada la ratificación en contenido y firma de dicha acta por sus suscriptores, resultan aptas y suficientes

para que se tenga por actualizada la causa de cese en la que el titular actor apoya la referida acción que ejerce, es necesario atender a las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece:

***“Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión.”***

En mérito de lo puntualizado, apreciando en conciencia el acervo probatorio allegado al expediente se advierte que con el valor probatorio pleno que le corresponde, no es apto para tener por demostrado que el trabajador demandado incurrió, el día de los hechos, en el acto de violencia que en contra de uno de sus compañeros se le atribuye, a fin de tener por actualizada la causa de cese en la que el titular actor sustenta su acción.

En efecto, para que se configure la causal invocada a que se refiere el inciso a) de la fracción V del artículo 46 de la legislación burocrática, que amerite la rescisión del nombramiento del trabajador, se tienen que actualizar dos



CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

requisitos: el primero, que el trabajador cometa actos de violencia en contra de alguno de sus compañeros, ya sea dentro o fuera del servicio; y, segundo, que como consecuencia de ello se altere la disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo.



En el caso no se acreditaron tales presupuestos, pues si bien es cierto que se produjo el evento de arrojar por parte del ahora demandado una lata vacía de refresco que impactó en la cara de uno de sus compañeros, no menos cierto resulta que en las circunstancias que ambos refieren que aconteció ese hecho, no fue producto de un acto de violencia dado que coinciden en aseverar que habían estado bromeando o "jugando" con motivo de una plática sobre un partido de fútbol, sin que obre prueba que acredite la intención de provocación o el ánimo del demandado de causar un daño físico a su compañero de trabajo Bernabé Ortega Pérez, con el que se desvirtúa su aseveración de que la lata de refresco vacía se le "safó" de las manos y *"me percaté que le había pegado sin querer en el lado izquierdo de su cara, en su ceja, le pedí disculpas, Bernabé me dijo que no había problema, que no había pasado nada"*; más aún, no existe evidencia alguna de que el demandado hubiese causado alguna lesión a su compañero, ya que en ese aspecto no obra constancia médica de lesión alguna.

Tampoco está probado el segundo elemento propio de la causal de mérito, consistente en la alteración de la disciplina en el centro de trabajo, ya que en autos no obra ninguna prueba, ni siquiera presuntiva en ese sentido, entendida ésta como la que provoca la suspensión de labores por parte de otros trabajadores o un desorden provocado por dicho acto; por el contrario, de lo declarado por el propio Bernabé Ortega Pérez se desprende que los hechos ocurrieron cuando ya se encontraba como conductor del vehículo en el que continuaría con el servicio, lo que así hizo dado que después de que le expresó al demandado que no había pasado nada, *"le dije al señor Marbán y a Jorge que se subieran que nos fuéramos al sede, y nos fuimos al sede"*; los demás testigos también afirman haber desempeñado sus actividades laborales con normalidad, pues incluso ni siquiera conocieron directamente los hechos que se atribuyen al demandado José Antonio López López y, por consiguiente, no produjeron aquella consecuencia.

En efecto, los llamados como testigos de cargo manifestaron, en lo conducente: Atanacio Issac Vera Ramírez, que el día de los hechos realizaban *"actividades de reincorporación de bienes y abastecimiento de avíos al salón de usos múltiples, ya nos encontrábamos fuera de la bodega, Bernabé Ortega se encontraba a bordo de la camioneta del lado del piloto y yo me encontraba a un*





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

constado del lado del copiloto... y me encontraba platicando con algunos de mis compañeros dentro de ellos José Marbán y Jorge Pablo González... y estaba a punto de irse la camioneta, repentinamente apareció el compañero José Antonio López del lado del piloto lanzó la lata sobre el rostro del compañero Bernabé Ortega, **no me percaté que había lanzado y le pregunté al compañero Bernabé qué había pasado ya que se estaba tocando el rostro**, me contesta molesto **que nada... me dirijo al compañero José Antonio López y le digo qué había pasado, posteriormente José Antonio López se acercó al compañero Bernabé y finalmente salió la camioneta al edificio sede**"; Jorge Pablo González Leal, que el día de los hechos **"cuando bajamos la segunda plancha me doy cuenta que Bernabé se iba sobando el ojo izquierdo, ya sobre Venustiano Carranza me doy cuenta que trae una herida y le pregunto qué había pasado"**; y José Concepción Marbán Vergara, que el día de los hechos **"estábamos terminando de cargar la camioneta el cual (sic) escuché que Bernabé y Pepe estaban bromeando y de pronto vi correr a Pepe y le pregunté qué había pasado y me dijo que sin querer le había arrojado una lata vacía a Bernabé, en ese momento nos subimos a la camioneta y Bernabé se estaba tapando el rostro y le comenté que eso les pasaba por estarse llevando tan pesado"**.



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

Luego, con las declaraciones de los mencionados testigos de cargo no se advierte que se hubiera alterado la disciplina en el lugar de trabajo, pues únicamente advirtieron que los dos involucrados estaban bromeando respecto de un partido de fútbol y todos siguieron con sus labores normales, lo que no podía ser de otra manera dado que ni siquiera conocieron de modo directo los hechos que se atribuyen al demandado, sino por conducto de Bernabé Ortega Pérez, además de que no obra prueba alguna de que esas bromas hubieran desembocado en una riña o pleito, ni siquiera de manera verbal entre los involucrados, o bien, en un acto de provocación por parte del demandado, pues incluso el compañero de trabajo con el que se suscitó el evento, Bernabé Ortega Pérez, afirmó que el día de los hechos: *“estábamos viendo lo de un partido de Pumas-América, burlándome de cómo le hacían las gallinas, nos íbamos (sic) ir al sede, tenían unas latas vacías y el compañero José Antonio López las iba a bajar, se dio la vuelta yo tenía mi vidrio bajado a media altura y el señor José Antonio López me lanzó la lata, me dijo qué había pasado y yo le dije que nada y le dije al señor Marbán y a Jorge que se subieran que nos fuéramos al sede, y nos fuimos al sede y fue todo lo que pasó”*.

Por tanto, es de concluir que como la disciplina en la fuente de trabajo comprende el desarrollo normal de las labores por parte de los trabajadores y éstos realizaron



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dichas actividades de esa forma, como se desprende de las declaraciones de los testigos de cargo y la del propio compañero con el que se suscitaron los hechos, Bernabé Ortega Pérez, es así que el acto que se atribuye al demandado, al margen de que no puede ser considerado como un acto de violencia, tampoco alteró la disciplina, para efectos de tener por actualizada la causa de cese por la que el titular actor solicita la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del demandado.

Al caso resultan ilustrativos los siguientes criterios de la entonces Cuarta Sala, que al rubro y texto dicen:

No. Registro: 369,985

**"CONTRATO DE TRABAJO, ACTOS DE VIOLENCIA QUE NO DAN LUGAR A LA RESCISIÓN DEL. Procede la rescisión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, cuando el trabajador comete, en contra de alguno de sus compañeros, alguno de los actos enumerados en la fracción II, del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, alterando la disciplina del lugar en que se desempeñan las labores, según la fracción III, del mismo precepto legal, esto es, se requiere la concurrencia de dos elementos: 1) Causa (cualquiera de las enumeradas en la fracción**

*II, del artículo citado). 2) Efecto (que se altere la disciplina del lugar en que el trabajo se desempeña). Ahora bien, si de las declaraciones de los testigos se deduce que el quejoso agredió a otro trabajador, dentro de la negociación, a la hora en que salía un turno y entraba otro, es de concluirse que con dicha testimonial se prueba que el agraviado cometió un acto de violencia, mas no que con ese acto se hubiera alterado la disciplina en el centro de trabajo. Por tanto, no concurre en el caso los requisitos de la fracción III, del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, para que el patrón pudiera rescindir el contrato celebrado con el quejoso.”*

No. Registro: 367,060

*“CONTRATO DE TRABAJO, RESCISIÓN DEL, POR RIÑA ENTRE LOS TRABAJADORES QUE CAUSA ALTERACIÓN DE LA DISCIPLINA. La riña habida entre los trabajadores comprende los malos tratos de uno a otro, así como los actos de violencia y las injurias que son inherentes a toda contienda de obra; esto es uno de los supuestos de la fracción III del artículo 121*



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TEMA  
CORTA DE  
LA NACIÓN  
AL DE ACUERDO

del Código Laboral, y el complemento de la causal de rescisión, es la alteración de la disciplina en el lugar en que se desempeña el trabajo. La disciplina en una fuente de trabajo comprende el desarrollo normal de las labores, que es la principal obligación del trabajador; la compostura en su actitud y lenguaje; el acatamiento de los reglamentos internos; el respeto para los compañeros y jefes etc. De manera que si a consecuencia de la contienda suscitada entre dos trabajadores; los demás suspenden su trabajo, abandonan su lugar y acuden a presenciar la riña, el orden se ha alterado y no se puede sostener lógicamente que a pesar de todo esto se conserve la disciplina que debe haber en un centro de trabajo, pues de estimarse así, se propiciarían situaciones que van en contra de los principios de orden y de mutuo respeto que deben normar la conducta colectiva de los trabajadores; sin que sea valedero en contra el argumento de que la riña haya tenido lugar en el baño de la fábrica, pues este lugar también es dependencia del centro de trabajo."

En ese sentido, debe reiterarse que en autos tampoco obra elemento de prueba que sea apto y suficiente para acreditar que la intención del trabajador demandado fuese la de agredir o lesionar a su compañero de trabajo Bernabé Ortega Pérez, y lo que el demandado reconoce es que la lata vacía de refresco se le escapó de las manos y se percató *“que le había pegado sin querer”* en la cara a dicho compañero, a quien le pidió *“disculpas”*, por lo que ese acto bien puede considerarse accidental al no obrar prueba fehaciente que permitiera conocer que su intención fuera la de realizar una provocación u otra actitud que mostrara su pretensión de causar un daño al demandado, máxime que los testigos de cargo no se percataron directamente de esos hechos, sino sólo de que habían estado bromeando respecto de un partido de fútbol, de donde no puede desprenderse que el demandado José Antonio López López hubiera incurrido en un acto de violencia en contra de su mencionado compañero de trabajo.



Cabe citar en apoyo de lo anterior, a contrario sensu, el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes:

**Registro: 244403**

**TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  
ESTADO, RESCISION DEL CONTRATO DE**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TE  
LA NACIÓN  
RAL DE ACUERDOS

TRABAJO DE LOS, CUANDO INCURREN EN VIOLENCIA, AMAGOS Y MALOS TRATOS EN CONTRA DE SUS COMPAÑEROS. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado precisa en su artículo 46, fracción V, como causal de rescisión del contrato los actos de violencia contra compañeros de trabajo dentro o fuera de las horas de servicio, y si el trabajador admite que golpeó a un compañero aun cuando alegue que fue para repeler la agresión de que fue objeto, agresión que se originó por la provocación que aquél hizo a éste, al dirigirle una palabra que el último consideró ofensiva, quedó demostrada la causa de rescisión y por tanto, el laudo dictado es correcto en términos de lo dispuesto por el artículo 137 de la ley citada, y se resolvió a verdad sabida y buena fe guardada."

Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 42 Quinta Parte. Materia(s): Laboral. Página: 84.

En consecuencia, resulta infundada la pretensión del actor Director General de Informática, actualmente Director General de Tecnologías de la Información de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, no se autoriza la terminación de los efectos del nombramiento de José Antonio López López en el cargo de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, plaza número 1795, con adscripción en la ahora Dirección General de Tecnologías de la Información.

Por lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

**PRIMERO.** El actor, entonces TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, no acreditó su pretensión y el demandado acreditó su defensa.

**SEGUNDO.** No se autoriza la terminación de los efectos del nombramiento de José Antonio López López en el cargo de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, plaza número 1795, con adscripción en la ahora Dirección General de Tecnologías de la Información.





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**TERCERO.** Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas y, en su oportunidad, lo archive como asunto concluido.

**CÚMPLASE.**

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA**

CONFLICTO DE TRABAJO 3/2010-C.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.



LIC. RAFAEL COELLO CETINA

La presente foja es la parte final de la sentencia en el Conflicto de Trabajo **3/2010-C**, suscitado entre el Director General de Informática, ahora Director General de Tecnologías de la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y José Antonio López López. Conste.

